



CONTRATOS con la empresa WilmerHale, elevan los gastos de consultores en Washington del gobierno local.

Festín de asesoría y cabildeo

WilmerHale aumenta el gasto del gobierno en consultores en EE.UU.

POR JOSÉ A. DELGADO
jdelgado@elnuevodia.com

WASHINGTON - Los contratos otorgados a la empresa WilmerHale, que ha asesorado al Gobierno de Puerto Rico en las negociaciones con el Gobierno federal sobre la reforma de la Policía y en el proyecto del Gasoducto, han disparado los gastos de la administración de Luis Fortuño en consultores de Washington, sobre todo, durante los últimos 13 meses.

En momentos en que la Administración de Asuntos Federales (PRFAA) ha desembolsado un presupuesto menor para gastos de cabildeo y asesores en la capital federal, WilmerHale -a través de departamentos del gobierno en San Juan- ha tenido contratos que pueden sobrepasar los \$3.5 millones.

La mayor parte de los acuerdos han sido firmados con la Policía de Puerto Rico, a los que asesora en las negociaciones con el Departamento de Justicia federal sobre la exigencia que hace el gobierno de Barack Obama para que reforme el departamento policial y con la que acaba de suscribir un nuevo acuerdo que le garantizaría hasta \$500,000 entre julio y diciembre de este año.

Desde julio de 2011, los contratos con la Policía pueden rondar los \$2 millones.

Pero, WilmerHale (cuyo nombre completo es Wilmer, Cutler, Pickering, Hale & Dorr) también tuvo vigente, hasta el 8 de agosto pasado, un contrato de hasta \$1 millón con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) relacionado con su asesoría al proyecto del gasoducto del gobernador Luis Fortuño.

Con el Banco Gubernamental de Fomento, los contratos de WilmerHale pueden estar entre los \$255,000 y los

\$405, 000 desde septiembre de 2011. Como parte de sus contratos,, WilmerHale representó además al Gobierno de Puerto Rico en el caso en que la administración Fortuño acudió como amigo de la corte a defender la posición del abogado estadista Gregorio Igartúa, a favor de otorgarle representación plena a la Isla en el Congreso.

Los contratos con el Departamento de Justicia de Puerto Rico, dedicados a servicios legales, han sido de por lo menos \$250,000. En mayo pasado, sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, rechazó revisar la decisión del Primer Circuito de Apelaciones que destimó el reclamo de Igartúa.

LOS CONTRATOS DE PRFAA

Bajo la supervisión de PRFAA, los principales contratos de este semestre han sido otorgados a los bufetes de Covington & Burling y DLA Piper, que recibirán cada uno \$150,000, de ahora al 31 de diciembre.

New World Group - la empresa del ex congresista republicano Jerry Weller, amigo del gobernador Fortuño desde los tiempos en que coincidieron en la Cámara de Representantes de Estados Unidos-, obtendrá \$120,000 este semestre, la misma cantidad que se le ha asignado al bufete Stanton Anderson.

A los que menos dinero les otorgará PRFAA este semestre será a la empresa The Oliver Group, del demócrata Jeff Farrow (quien fue copresidente del grupo interagencial de la Casa Blanca del demócrata Bill Clinton), y Bryan Cave, que estarán limitados a máximos de \$108,000 y \$60,000 respectivamente.

“PRFAA disminuyó el gasto de consultores en un 35% si comparamos los contratos de los primeros seis meses del año fiscal 2013 con los del primer se-

El cabildeo en Washington

Contratos de cabilderos y consultores del ejecutivo de Puerto Rico en la capital federal durante el cuatrienio

Empresa	Agencias	Julio a dic. 2012	2011-2012	2010-2011	2009-2010	Feb. a Jun. 2009
Bryan Cave	PRFAA		\$60,000	\$120,000	\$240,000	\$377,000
	AEE			\$250,000*		
	Puertos		\$90,000	\$100,000	\$125,000	\$100,000
DLA Piper	PRFAA		\$150,000	\$300,000	\$300,000	\$380,000
Covington & Burling	PRFAA		\$150,000	\$300,000	\$300,000	\$370,000
	Salud				\$125,000	
New World Group	PRFAA		\$120,000	\$240,000	\$300,000	\$311,000
The Oliver Group	PRFAA		\$108,000	\$216,000	\$300,000	\$377,000
Stanton Anderson	PRFAA		\$120,000	\$240,000	\$275,000	\$14,000
WilmerHale	Policía		\$500,000	\$1,250,000**	\$500,000	
	BGF		\$105,000	\$350,000***		
	Justicia			\$250,000 +		
	AEE			\$1,000,000		
Kearsarge Global Advisers	(relaciones públicas)		\$96,000	\$150,000		
García y Asociados	PRFAA				\$97,000	\$27,000
TOTALES			\$1,313,000	\$4,702,000	\$2,590,000	\$2,050,000
						\$1,121,000

*El contrato de Bryan Cave con la AEE se extiende de febrero de 2011 a febrero de 2012
**Hubo múltiples contratos de la Policía de Puerto Rico con Wilmer & Hale durante el pasado año fiscal. La Policía no mostró interés, a través de su portavoz, en dar precisiones. Los contratos pueden haber sumado hasta \$1.75 millones, de acuerdo con los que aparecen en la Oficina del Contralor, pero es muy probable que por lo menos uno haya sido una ampliación. El Nuevo Día calculó que deben haber rondado los \$1.25 millones.
*** Los contratos WilmerHale con el BGF pudieron haber fluctuado \$350,000 y los \$500,000 en el año fiscal 2011-2012.
+ Los contratos WilmerHale con Justicia pudieron haber fluctuado \$250,000 y los \$350,000 en el año fiscal 2011-2012.

mestre del año fiscal 2009”, el último semestre del gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, según la directora ejecutiva de PRFAA, Nicole Guillemard.

Para Guillemard, la asesoría de los cabilderos de PRFAA, junto a la oficina del comisionado Pedro Pierluisi, han sido claves en presionar a favor de las asignaciones de la ley de recuperación económica ARRA -que han ascendido a sobre \$7,000 millones – y en la “triplicación de los fondos de Medicaid” a través de la reforma de salud del presidente Barack Obama, una medida bajo amenaza republicana.

Entre otras cosas, Guillemard destacó además el impacto económico de \$800 millones que ha tenido la reducción de 2% en el descuento por nómina del pago al Seguro Social -una iniciativa del presidente Obama-, y la inclusión de Puerto Rico en el “American Opportunity Tax Credit”, que le ha significado a la Isla cerca de \$230 millones.

La reducción de contratos para cabilderos otorgados desde PREFAA, sin embargo, ha sido difuminada por el incremento en los acuerdos con la empresa Wilmer & Hale a través de dependencias del Gobierno de Puerto Rico en la Isla.

Para el candidato del Partido Popular Democrático (PPD) a comisionado residente en Washington, Rafael Cox Alomar, el gobierno de Luis Fortuño dedicó demasiados recursos en la capital federal al cancelado proyecto de status 2499 del comisionado Pierluisi y al proyecto del Gasoducto.

“El país estaría en una mejor situación si hubiesen destinado los recursos a promover la sección 933 A del Código de Rentas Internas federal”, una legislación que persigue nuevos incentivos para las empresas que invierten en Puerto Rico, sostuvo Cox Alomar.

En momentos en que la crisis fiscal ha tocado techo, el gobierno de Fortuño puede haber gastado un promedio anual cercano a los \$3 millones anuales en consultores en Washington.

Los gastos han ido en baja desde el gobierno de Pedro Rosselló, cuando los contratos promediaron \$5.5 millones anuales.

Bajo las administraciones de Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá se calcula que los contratos estuvieron cercanos a los \$4 millones y \$3.5 millones anuales, respectivamente.



Aunque haya gastado menos frente a otras administraciones el próximo gobierno debe depender más de PRFAA y menos de cabilderos que “cobran hasta \$700 la hora”

RAFAEL COX ALOMAR
candidato a
Comisionado
Residente por el PPD

Atrasada reforma policial

WASHINGTON - Con la contratación del bufete de WilmerHale el Gobierno de Puerto Rico solo retrasa la intervención federal sobre el proceso de reforma de la Policía puertorriqueña, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

“El proceso no se debe alargar a costa del dinero del pueblo. Ese es dinero que puede ser utilizado para comprar chalecos y otros equipos necesarios para los policías”, indicó William Ramirez, director de la oficina de la ACLU en Puerto Rico.

El gobernador Luis Fortuño ha rechazado que se describa la función del bufete de WilmerHale como “cabilderos” de su administración. “Son los expertos en procesos de reforma policial”, ha indicado el Gobernador.

Pero, Ramirez considera que no es posible identificarlos de otra forma, pues el rol que se les conoce públicamente incluye “dilatarse el proceso” de evaluación en el Departamen-

to de Justicia de Estados Unidos sobre cómo supervisar una reforma de la Policía de Puerto Rico.

En cuestión de días, el 8 de septiembre, se cumplirá un año de que la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicara su informe en el que determinó que la Policía de Puerto Rico ha creado una crisis de derechos civiles en la Isla.

Desde entonces, el secretario adjunto de Justicia federal para Asuntos de Derechos Civiles, Thomas Pérez, y su oficina han advertido que su intención es acudir al Tribunal Federal de San Juan a reclamar un proceso de reforma de la Policía, sea por medio de un “decreto de consentimiento” o una litigación formal.

La ACLU ya sometió una demanda en el Tribunal Federal de San Juan, con el propósito de que ese foro ordene y supervise una reforma de la Policía de Puerto Rico.



Los principales beneficiarios de los contratos:

Wilmer & Hale	\$3.8 millones
Covington & Burling	\$1.35 millones
DLA Piper	\$1.34 millones
Oliver Group	\$1.21 millones
New World Group	\$1.09 millones
Bryan Cave	\$1 millón